



Este documento es copia del original firmado.
En aplicación de la normativa vigente, se han
ocultado los códigos que permitirían acceder
al original.

Dirección General de Inversiones
y Desarrollo Local
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Exp.: A/OBR-003932/2025

MUNICIPIO: Pinilla del Valle

ACTUACIÓN: "Acondicionamiento de cementerio municipal"

PROGRAMA: Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2022-2026.

ASUNTO: Tramitación urgente. Procedimiento abierto simplificado. Criterio precio.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 161.004,15 (IVA incluido)

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 133.061,28 euros

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS EXTREMOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 116.4 DE LA LEY 9/17, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (LCSP), DEL CONTRATO DE ACONDICIONAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE PINILLA DEL VALLE.

Mediante la presente memoria se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que establece que:

"4. En el expediente se justificará adecuadamente:

- a) La elección del procedimiento de licitación.*
- b) La clasificación que se exija a los participantes.*
- c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo.*
- d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.*
- e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.*
- f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.*
- g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso".*

1. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Conforme a lo previsto en el artículo 159.1 LCSP:

"1. Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

- a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000,00 de euros en el caso de contratos de obras.
- b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.

En el caso de la contratación que se propone se dan conjuntamente estos dos requisitos, ya que el valor estimado, que incluye el presupuesto de ejecución material, los gastos generales y el beneficio industrial, pero no el IVA, dado que no se prevén modificados ni prórrogas, asciende a **133.061,28 euros** es por tanto inferior a 2.000.000,00 de euros, y además, no se prevé ningún criterio de adjudicación evaluable mediante juicio de valor, por lo que procede la contratación siguiendo el procedimiento abierto simplificado.

De otro lado, en consonancia con lo establecido en los artículos 145 y 146, apartado 1, LCSP, se ha atendido a un criterio único basado en la mejor relación coste-eficacia, concretamente el precio.

La elección del criterio único precio obedece a que las características de la actuación a llevar a cabo, vienen perfectamente definidas en el proyecto y no precisan para su correcta ejecución establecer otros parámetros, además del precio, para valorar las ofertas.

A juicio de este centro gestor, la definición de la prestación no es susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo de ejecución y no se da ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 145.3 LCSP, ni en ningún otro de sus apartados, que, de darse, exigiría necesariamente la pluralidad de criterios.

Este centro gestor entiende que las prestaciones tal y como están definidas en el proyecto de obra, permiten obtener una obra que responde a las necesidades que se pretende satisfacer con el contrato.

El criterio precio está vinculado al objeto del contrato y es un criterio objetivo, que respeta los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no confiere al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada, resultando pues adecuado y pertinente en el presente contrato. No se considera que otros aspectos puedan ser susceptibles de mejorar de forma relevante la prestación de forma que resulte recomendable establecer una pluralidad de criterios de adjudicación, por lo que se propone una adjudicación basada en un único criterio basado en los costes, el precio.

Al disponer de un proyecto de obras aprobado, que contiene una perfecta definición de las prestaciones, con la introducción de un único criterio se busca comparar ofertas prácticamente idénticas en las que tan solo el precio y no la cantidad o calidad de las prestaciones, marque la diferencia entre ellas, lo que justifica no utilizar una pluralidad de criterios de adjudicación. Asimismo, la obra no reviste especial complejidad ni presenta características particulares que hagan aconsejable valorar otros aspectos a través de los criterios de adjudicación. En este sentido, se indica que el plazo de ejecución tampoco ha de reducirse sin menoscabo de la correcta ejecución del contrato; ni se considera adecuado ampliar plazos de garantía. Asimismo, la valoración de aspectos concretos relativos a la organización, cualificación y experiencia del personal no se considera que pueda afectar de manera significativa a una mejor ejecución de las obras.

2. CLASIFICACIÓN. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4 a) LCSP todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

2.1 CLASIFICACIÓN

No se exige clasificación de los empresarios como contratistas de obras por tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado es inferior a 500.000,00 euros. (artículo 77.1.a) LCSP). No obstante, de conformidad con lo previsto en el artículo 77.1.a) LCSP: “Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000,00 euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados

en los pliegos del contrato”.

Clasificación alternativa del contratista:

Grupo: C—Edificaciones

Subgrupo: 4 – Albañilería, revocos y revestidos

Categoría:1.

Atendiendo a las características y al valor estimado del contrato, la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica de los licitadores, deberá acreditarse conforme a lo previsto en los artículos 87 y 88 LCSP, sin perjuicio de que pueda, asimismo, acreditarse conforme a lo que dispone el artículo 77.1 de la citada Ley.

En la presente memoria se justifican los criterios de solvencia y su acreditación, quedando así fijada la solvencia con precisión, relacionada con el objeto e importe del contrato, sin que produzca efectos de carácter discriminatorio. Los criterios utilizados son ponderados y proporcionales al importe del contrato, sin que se excluya a empresarios capacitados para la ejecución del mismo.

El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente, bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación y detallados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato y que se justifican en la presente memoria, o mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo y subgrupo de clasificación correspondiente al contrato.

A continuación, se exponen los criterios de solvencia que se consideran más adecuados, dadas las características del contrato.

2.2 SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA

2.2.1.- Acreditación de la solvencia económica y financiera

Medio

Se ha optado por establecer el criterio señalado en el artículo 87.1 a) LCSP, en el que se regula la acreditación por el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados

con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El órgano de contratación indicará las principales razones de la imposición de dicho requisito en los pliegos de la contratación o en el informe específico a que se refiere el artículo 336.

Criterios de selección:

Volumen de negocios anual de la empresa, referido al año del mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, debe alcanzar el importe de **199.591,92** euros.

Siendo el valor estimado del contrato de **133.061,28** euros, el importe mínimo exigido no excede de una vez y media el valor estimado, que asciende a la cantidad de **199.591,92** euros.

Acreditación documental:

Declaración responsable del empresario indicando el volumen de negocios de la empresa.

2.2.2.- Acreditación de la solvencia técnica y profesional

El medio de acreditación de la solvencia técnica que se considera más adecuado, dadas las características del contrato, es el previsto en el artículo 88.1 a) LCSP, si bien se contempla, de acuerdo con lo previsto en el artículo 88.2 LCSP, un medio distinto para las empresas de nueva creación.

a) Empresas con antigüedad igual o superior a 5 años:

Medio:

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de las obras pertinentes ejecutadas en los últimos diez años.

Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre

que este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquél en el capital social de ésta.

Criterios de selección:

El importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado en el año de mayor ejecución de los últimos 5 años en obras correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, será igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato que asciende a **93.142,90** euros.

Acreditación documental:

Relación firmada por el representante legal de la empresa y certificados en los que indique el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precise si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

b) Empresas con antigüedad inferior a 5 años:

Medio:

Los medios de acreditación de la solvencia técnica que se consideran más adecuados, dadas las características del contrato, son los previstos en el artículo 88.1 b) y c) LCSP (acumulativos).

Artículo 88.1 LCSP, apartado b): Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras acompañadas de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Criterio de selección:

Se deberá acreditar que la empresa cuenta entre su personal técnico con al menos: un responsable de las obras, con una experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la profesión y dos peones especializados.

Acreditación documental:

Declaración responsable del representante legal de la empresa, indicando que para la ejecución del contrato dispone efectivamente de este personal.

Artículo 88. 1 LCSP, apartado c): Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras, así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación.

Criterio de selección:

Se deberá acreditar que la empresa cuenta entre su personal técnico con al menos un responsable de las obras con titulación mínima de Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico o titulaciones asimilables.

Acreditación documental:

Presentación acreditativa del título mínimo exigido, esto es, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico (o titulación asimilable).

3. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

De conformidad con el artículo 202 LCSP, es condición especial de ejecución la utilización de métodos de demolición selectiva que permita un seguimiento y control del destino final de los enseres y residuos generados en la obra, en especial aquellos considerados valorizables y/o peligrosos.

En este sentido, en el plazo de 5 días desde la formalización del contrato, se deberá presentar, en el Plan de Gestión de Residuos de cada contrato, una descripción de medios materiales para la demolición selectiva y un sistema de seguimiento y control del mismo.

Por otro lado, 10 días antes de la finalización de la ejecución del contrato, se deberá acreditar el cumplimiento de dicho Plan.

Esta condición especial de ejecución no es discriminatoria directa, ni indirectamente y es compatible con el derecho comunitario.

Esta condición especial tendrá la consideración de obligación **esencial** del contrato y su incumplimiento constituirá causa de resolución del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 211.1 f) LCSP.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON UNA INDICACIÓN DE TODOS LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN, INCLUYENDO SIEMPRE LOS COSTES LABORALES SI EXISTIESEN

El presupuesto base de licitación se ha calculado en base al presupuesto de ejecución del proyecto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 233 d) de la LCSP, los proyectos de obra deberán comprender al menos “un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. El presupuesto se ordenará por obras elementales, en los términos que reglamentariamente se establezcan”.

El presupuesto del proyecto detalla el presupuesto de ejecución material, definido en el artículo 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, como el resultado obtenido de la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas, y asciende a la cantidad de **111.816,20 euros**.

El importe de los precios unitarios, contenido en el proyecto, se encuentra en el entorno de los valores marcados en la Base de Precios de la Construcción Centro del año 2019 del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara.

Asimismo, el presupuesto base de licitación, conforme a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 131 RGLCAP, se obtiene incrementado el de ejecución material con los gastos generales de estructura que inciden en el contrato y que se cifran en un porcentaje entre el 13% y el 17% sobre el presupuesto de ejecución material, que en el caso de este contrato es de un 13%, por un importe de **14.536,11 euros**.

También deberemos sumar al presupuesto de ejecución material un porcentaje del 6% en concepto de beneficio industrial, en este caso, **6.708,97 euros**.

Obtenemos así un presupuesto de **133.061,28 euros**, al que hay que aplicar el tipo impositivo vigente del 21%, del impuesto sobre el valor añadido, conforme a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicho tipo es del 21%, con un importe de IVA de **27.942,87 euros**.

El resultado de estas operaciones aritméticas da el presupuesto base de licitación, que conforme dispone el artículo 100 LCSP es el límite máximo de gasto que, en virtud del contrato, puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. El presupuesto base licitación de este contrato son **161.004,15 euros**.

Según lo expuesto, el presupuesto recogido en el proyecto de obra es el siguiente:

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE
1	DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS	8.469,90

2	ALBAÑILERÍA Y SOLADOS	14.030,03
3	NICHOS Y COLUMBARIOS	58.242,46
4	CERRAJERÍA Y VIDRIERAS	13.114,45
5	PINTURA	17.007,32
6	GESTIÓN DE RESIDUOS	952,04
	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	111.816,20
	13,00% Gastos generales	14.536,11
	6,00% Beneficio industrial	6.708,97
	SUMA DE G.G. y B.I.	21.245,08
	BASE IMPONIBLE	133.061,28
	21,00% I.V.A	27.942,87
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	161.004,15
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	161.004,15

No se prevé expresamente la posibilidad de modificar el contrato ni tampoco su prórroga, de ahí que el valor estimado del contrato, definido en el artículo 101 LCSP para los contratos de obra como el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones, es de **133.061,28 euros**

De otro lado, atendiendo al plazo de ejecución de la obra previsto en el proyecto que es de 2 meses, se prevé la ejecución de la misma en el ejercicio presupuestario 2025, siendo prevista la fecha de inicio el 1 de agosto de 2025

Conforme a lo expuesto, en consonancia con el plan de desarrollo de los trabajos incluido en el Proyecto, la distribución del presupuesto del contrato en anualidades sería la siguiente:

Desglose por año	Importe con IVA	Plazo
Año 2025	161.004,15 euros	2 meses

El gasto se efectuará con cargo al Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid del ejercicio 2025, imputándose a la aplicación presupuestaria G/942N/62900 y al proyecto de gasto **2025/000597**.

Por último, el artículo 116.5 LCSP establece que: “si la financiación del contrato ha de realizarse con aportaciones de distinta procedencia, aunque se trate de órganos de una misma Administración pública, se tramitará un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación del contrato, debiendo acreditarse en

aqué la plena disponibilidad de todas las aportaciones y determinarse el orden de su abono, con inclusión de una garantía para su efectividad.”

En el caso de este expediente, hay que considerar que el municipio de Pinilla del Valle, contaba con una población en 2021 de 190 personas (2021 es el año que ha de considerarse para el cálculo de la población a los efectos de la cofinanciación del PIR 2022-2026).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid en la redacción vigente a la entrada en vigor de la Ley 8/2024, de 26 de diciembre, de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid y el artículo 5.2 del Decreto 118/2020, de 23 de diciembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, modificado por Decreto 211/2021, de 15 de septiembre, por los que se regula el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2022-2026 y que resultaba de aplicación a la presente actuación en el momento de la solicitud, se establecía en su apartado primero que, “El programa Regional de Inversiones y Servicios será cofinanciado entre la Comunidad de Madrid y las Entidades Locales, excepto en los municipios con población inferior a 2.500 habitantes, en los que no habrá aportación municipal”.

5. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES

La finalidad del contrato es la entrega de una obra completa para el uso público. Los distintos apartados que conforman el proyecto de obras no pueden ser considerados como lotes independientes que pueden ser individualizados, dada la íntima y directa conexión que presentan unas tareas con respecto de las otras desde el punto de vista técnico.

La ejecución del programa de trabajo de la obra implica la necesidad de coordinar de forma óptima las distintas prestaciones, conforme se van desarrollando los trabajos y los plazos establecidos para cada una de ellas, de conformidad con las directrices emitidas por la Dirección Facultativa, cuestión que podría verse imposibilitada si su ejecución se encargase a una pluralidad de contratistas diferentes, poniendo en riesgo la correcta ejecución del contrato. Diariamente, durante la ejecución de la obra surgen incidencias o se plantean cuestiones que exigen la toma de decisiones de carácter inmediato por parte del encargado de la obra, que tiene que valorar las consecuencias de las mismas, tanto desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista económico, para adoptar la más adecuada, de conformidad con el criterio de la Dirección Facultativa a la que, obligatoriamente, ha de consultar.

El fraccionamiento en lotes de las distintas tareas contempladas en el proyecto de obras y, por tanto, en el programa de trabajo, en el que se fijasen las condiciones técnicas y plazos para el desarrollo de las mismas, dificultaría su correcta ejecución desde el punto de vista técnico, impidiendo llevar a cabo aquellas actuaciones necesarias para atender las posibles incidencias que puedan surgir durante la ejecución del contrato, pudiendo dar lugar a demoras que no permitan cumplir el plazo establecido para la ejecución de la obra o a incrementos de costes imprevistos e innecesarios.

Por otra parte, debe añadirse a lo anterior, la conveniencia de una única respuesta a la entrega al uso público, así como a la subsanación de los defectos observados que puedan deberse a deficiencias en la ejecución de la obra durante el plazo de garantía establecido, sin que se generen controversias sobre las posibles responsabilidades en el caso de existir varias empresas adjudicatarias, cuya resolución podrían alargarse en el tiempo, con el perjuicio para la puesta en funcionamiento de la instalación y, en definitiva, para sus posibles usuarios.

6. NECESIDAD DE SEGURO

En la propuesta de contratación y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se incluye la exigencia a la empresa que resulte adjudicataria a suscribir y mantener en vigor durante la ejecución de la obra y hasta la recepción, incluyendo el plazo de garantía, los siguientes seguros:

Seguro de todo riesgo de construcción para hacer frente a todos los daños que se puedan producir de manera accidental o imprevisible durante la ejecución de la obra, y un seguro de responsabilidad civil incluida la Responsabilidad Civil Profesional, para hacer frente a los daños que se puedan ocasionar a terceros en el desarrollo de la actividad de construcción, es decir, a las reclamaciones derivadas de la actividad objeto del contrato de obra.

Ambos estarán vigentes durante toda la ejecución del contrato de obra y hasta la finalización del periodo de garantía.

Si bien el adjudicatario debe constituir una garantía definitiva en favor de la Administración, ésta cubre, a tenor de lo dispuesto en el artículo 110 LCSP, los siguientes conceptos:

- a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.
- b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley.
- c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de

contratación, de los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.

e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

Sin embargo, el objeto del contrato de seguro de todo riesgo de construcción y el del seguro de responsabilidad civil incluida la Responsabilidad Civil Profesional, para hacer frente a las reclamaciones derivadas de la actividad objeto del contrato, son otros, como se ha expuesto.

El centro gestor entiende que el aseguramiento de dichas responsabilidades coadyuva a la mejor satisfacción del interés de la Administración en la ejecución del contrato y en la protección de terceros que eventualmente puedan resultar perjudicados por la actuación del contratista en la realización de la obra. Por estas razones, se considera apropiado exigir al contratista que celebre los contratos mencionados.

En Madrid, el día de la fecha

.

EL DIRECTOR GENERAL
DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

Firmado digitalmente por: TORTOSA DE LA IGLESIA JOSE
Fecha: 2025.04.24 14:52